

Antes de entrar a analizar el texto sometido a informe es preciso señalar que, habida cuenta de la fundamentación legal del informe que inmediatamente va a evacuarse y su carácter preceptivo, a tenor de lo dispuesto en las normas que acaban de señalar, debería indicarse en la Exposición de Motivos de la norma que la misma ha sido sometida al previo informe de la Agencia Española de Protección de Datos.

El proyecto remitido tiene por objeto la aprobación de un nuevo reglamento del Registro de la Propiedad Intelectual, previsto en los artículos 144 y 145 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, derogando la regulación actual contenida en el Real Decreto 281/2003, de 7 de marzo, el cual fue objeto de informe favorable por esta Agencia el 10 de julio de 2002.

De este modo, la nueva regulación, si bien mantiene en lo sustancial la regulación anterior, procede a una adaptación de la normativa reguladora del Registro de la Propiedad Intelectual a la nueva realidad digital, dentro del proceso de transformación digital de las Administraciones Públicas, permitiendo el establecimiento de un servicio plenamente digitalizado y accesible a través de medios electrónicos, estableciendo un Registro digital en el que los procedimientos se pueden tramitar de forma telemática tanto por la ciudadanía, como por los responsables de la gestión interna de su actividad, permitiendo, asimismo, mejorar la eficiencia administrativa.

Por ello, sin excluir la posible presentación de las solicitudes de manera presencial, se articula un sistema de presentación preferente por medios electrónicos, realizándose, en todo caso, el proceso de tramitación de los expedientes de forma electrónica, así como se introduce la posibilidad del acceso a través de internet al contenido de los asientos.

La aprobación de esta norma figura entre los compromisos adquiridos ante la Unión Europea en el marco del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia como una “Reforma” a llevar a cabo dentro del proyecto de “Refuerzo de los derechos de autor y derechos conexos” del Componente 24, relativo a la “Revalorización de la Industria Cultural” (C24.R2). Concretamente, se trata del hito 353 del CID, de 16 de junio de 2021, que comprende la adopción del real decreto para la aprobación de un nuevo reglamento del Registro de la Propiedad Intelectual, antes del 31 de diciembre de 2023.

I

El proyecto remitido procede a una regulación del Registro de la Propiedad Intelectual ajustada al régimen jurídico de la Administración electrónica recogido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Esta Agencia ha tenido oportunidad de pronunciarse, en relación con la necesaria salvaguardia del derecho fundamental a la protección de datos personales en la Administración electrónica, en sus informes 26/2015 y 91/2018.

En el informe 26/2015, referente al Anteproyecto de Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas ya destacó la necesidad de incluir expresamente, dentro de los derechos de las personas en sus relaciones con la Administración, el de protección de sus datos de carácter personal, y en particular, en relación con los registros electrónicos, a la necesidad de implantar en los mismos las medidas de seguridad previstas en la normativa de protección de datos, a fin de garantizar que no se produzca la pérdida, acceso accidental o destrucción de los documentos o solicitudes presentadas por los ciudadanos que pudieran contener datos de carácter personal, señalando que

Particularmente relevante será la referencia a la necesaria adopción de las medidas de seguridad establecidas no sólo en el Esquema Nacional de Seguridad sino también la normativa de protección de datos de carácter personal dentro de la normativa reguladora de los registros a los que se refiere el Anteproyecto y, en particular, en el Registro de apoderamientos y en los regulados por el artículo 30.

Posteriormente, el informe 91/2018 referente al proyecto de Real Decreto por el que se desarrollan las leyes 39/2015 y 40/2015 ambas de 1 de octubre de 2015, en materia de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, incidía en la necesidad de garantizar, en dichas normas de desarrollo, el derecho a la protección de datos de carácter personal, tal y como se había recogido en la Ley 39/2015 tras las anteriores observaciones:

La norma presentada a informe es, tal y como proclama su título, desarrollo de las leyes 39/2015 y 40/2015, de 1 de octubre (en adelante leyes 39/2015 y/o 40/2015) en materia de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos. Pues bien, una primera

conclusión que cabe extraer, y que desde el punto de vista del informe de esta Agencia podría ser suficiente, es que dichas leyes contienen ya una referencia explícita a que las relaciones entre las Administraciones Públicas, o en las relaciones de estas con los interesados, habrá de cumplirse en todo momento con la normativa de protección de datos, circunstancia ésta, como no puede ser de otro modo, que se extiende igualmente a sus normas de desarrollo. Así, cabe mencionar que dichas obligaciones se recogen en los artículos 13.h), 16.1 (3º) y 17 de la ley 39/2015, y en los artículos 3.2, 4.2 y 155 de la ley 40/2015.

El art. 13 h) de la ley 39/2015 establece como un derecho de las personas en sus relaciones con las administraciones públicas el de la protección de datos de carácter personal, y en particular a la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones de las Administraciones Públicas.

Ello se extiende a los registros, en cuanto que cauce esencial de las solicitudes de los administrados a las Administraciones: Tanto el Registro Electrónico General de cada Administración como los registros electrónicos de cada Organismo cumplirán con las garantías y medidas de seguridad previstas en la legislación en materia de protección de datos de carácter personal. (art. 16.1 de la ley 39/2015), y también se extiende a los archivos, como soporte electrónico de los documentos de procedimientos finalizados: Los medios o soportes en que se almacenen documentos, deberán contar con medidas de seguridad, de acuerdo con lo previsto en el Esquema Nacional de Seguridad, que garanticen la integridad, autenticidad, confidencialidad, calidad, protección y conservación de los documentos almacenados. En particular, asegurarán la identificación de los usuarios y el control de accesos, así como el cumplimiento de las garantías previstas en la legislación de protección de datos. (art. 17.3º de la ley 39/2015).

Desde el punto de vista del régimen jurídico de las Administraciones Públicas, la ley 40/2015 establece como un principio general de su actuación y de las relaciones entre las mismas el de garantizar [...] la protección de los datos de carácter personal, (de los ciudadanos que se relacionan con ella) –art. 3.2 ley 40/2015. Y el art. 4.2 de dicha norma reconoce el valor del derecho fundamental a la protección de datos personales como un límite a la actuación administrativa, lo que corrobora el art. 155, ya que las transmisiones de datos entre las Administraciones Públicas han de estar sujetas a lo permitido por la normativa de protección de datos personales.

En definitiva, la actuación y el funcionamiento del sector público por medios electrónicos conlleva una serie de ventajas en materia de eficacia, eficiencia, simplicidad, racionalización de costes etc. pero no podemos dejar de mencionar que también existen más riesgos para el

derecho fundamental de los particulares a la protección de sus datos personales, por lo que las leyes 39/2015 y 40/2015 han hecho hincapié en que dichos medios electrónicos han de ser usados siempre de conformidad con la normativa de protección de datos. Y dicha normativa habrá de ser cumplida por lo tanto escrupulosamente cuando de las normas de desarrollo de dichas leyes se trata, o de las actuaciones específicas derivadas de las mismas, pues en caso contrario dichas normas de desarrollo o actuaciones que incumpliesen los mandatos de la ley estarían incurso en causas de invalidez (art. 47 y 48 ley 39/2015).

Asimismo, deben tenerse en cuenta las obligaciones que, en materia de protección de datos personales, se recogen en otras normas específicas, como ocurre con el Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad, cuyo artículo 3, introducido a propuesta de esta Agencia, regula los sistemas de información que traten datos personales en los siguientes términos:

Artículo 3. Sistemas de información que traten datos personales.

1. Cuando un sistema de información trate datos personales le será de aplicación lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos) y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, o, en su caso, la Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales, el resto de normativa de aplicación, así como los criterios que se establezcan por la Agencia Española de Protección de Datos o en su ámbito competencial, por las autoridades autonómicas de protección de datos, sin perjuicio de los requisitos establecidos en el presente real decreto.

2. En estos supuestos, el responsable o el encargado del tratamiento, asesorado por el delegado de protección de datos, realizarán un análisis de riesgos conforme al artículo 24 del Reglamento General de Protección de Datos y, en los supuestos de su artículo 35, una evaluación de impacto en la protección de datos.

3. En todo caso, prevalecerán las medidas a implantar como consecuencia del análisis de riesgos y, en su caso, de la evaluación de impacto a los que se refiere el apartado anterior, en caso de resultar agravadas respecto de las previstas en el presente real decreto.

El proyecto objeto de informe ha tenido en cuenta estas consideraciones, así como el criterio reiteradamente manifestado por esta Agencia sobre la necesidad de que, en los supuestos en que se introduzcan regulaciones en nuestro ordenamiento jurídico que tengan especial trascendencia en los tratamientos de datos de carácter personal, se proceda previamente a un análisis de los riesgos que puedan derivarse de los mismos, incluyendo en la MAIN un estudio sistematizado del impacto que en el derecho fundamental a la protección de datos personales de los interesados han de tener los distintos tratamientos de datos que prevé la ley. Incluso, en supuestos determinados como podría ser el presente, la necesidad de realizar la Evaluación de impacto en la protección de datos personales a la que se refiere el artículo 35.10 del RGPD.

De este modo, a propuesta de la Delegada de Protección de Datos del ministerio proponente la MAIN ha incluido en el análisis de otros impactos el impacto en materia de protección de datos personales, (apartado 8.2.) adjuntando como anexo el análisis de riesgos realizado con la herramienta Evalúa Riesgo RGPD, con la que se obtuvo como valoración del riesgo residual un riesgo bajo, y en el que se describen las mitigaciones que se aplican para minimizar el impacto de las fuentes de riesgo existentes.

Asimismo, se ha incluido en el proyecto de real decreto una disposición adicional única con el siguiente contenido:

Disposición adicional única. Protección de datos de carácter personal.

1. Los tratamientos de datos personales regulados en el presente real decreto se llevarán a cabo conforme a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Los derechos de acceso, rectificación y supresión se ejercitarán conforme a la normativa referida en el párrafo anterior, sin perjuicio de las especificidades que se recojan, en su caso, en los apartados siguientes.

2. El tratamiento de los datos personales relativos a las solicitudes dirigidas al Registro de la Propiedad Intelectual, a las que se refieren los artículos 12 y 13, tendrá por finalidad la inscripción de los derechos relativos a las obras, actuaciones o producciones protegidas por el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, de acuerdo con lo previsto en el artículo 18 y siguientes.

Responsable y Base jurídica del tratamiento: Son responsables del tratamiento: el centro directivo competente en materia de propiedad

intelectual del Ministerio de Cultura y Deporte y las Comunidades Autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla competentes en la materia, al objeto de poder desarrollar sus funciones.

La base jurídica del tratamiento es el artículo 6.1 e) del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016.

Minimización de datos: los datos recogidos se limitarán al nombre, apellidos, NIF/NIE/Nº de documento que acredite la identidad si se trata de personas extranjeras, nacionalidad, domicilio, correo electrónico y teléfono del titular o titulares de los derechos de propiedad intelectual que se pretendan inscribir, así como la identificación del medio electrónico, o en su defecto, lugar físico en que desea que se practique la notificación.

Fuentes y exactitud de los datos: Los datos personales serán recabados de las solicitudes formuladas ante el Registro de la Propiedad Intelectual.

Transparencia: En virtud de la referida procedencia de los datos obtenidos, las obligaciones de información a los interesados a efectos de lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, se ajustarán al hecho de que la misma sea conocida por el interesado cuando hubiera sido facilitada por el mismo.

Cuando la información no se hubiera obtenido de los interesados se informará en los términos del artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679, salvo que la comunicación de esta información resulte imposible o suponga un esfuerzo desproporcionado, por referirse a tratamientos con fines de investigación histórica o estadísticos, en cuyo caso se adoptarán las medidas adecuadas para hacerla pública, y específicamente en la página web del Ministerio competente se realizará la publicación o las formas de acceder a esa información.

Conservación y seguridad de los datos: En virtud de la finalidad del tratamiento, la conservación de los datos será indefinida, aun cuando se cancele el asiento registral.

El responsable del tratamiento garantizará la aplicación de las medidas de seguridad correspondientes en cumplimiento del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad y la Orden CUD/1313/2019, de 27 de diciembre, por la que se aprueba la Política de Seguridad de la Información en el ámbito de la administración electrónica del Ministerio de Cultura y Deporte.

El ejercicio de derechos para las personas físicas sujetas a la normativa de protección de datos se garantizará conforme a la normativa general de protección de datos.

Estos datos sólo serán comunicados a otras Administraciones Públicas y a la Administración de Justicia en el ejercicio de sus competencias, cuando sea necesario para la tramitación y resolución de

sus procedimientos, y se limitarán a la gestión de las inscripciones de derechos de propiedad intelectual en el Registro de la Propiedad Intelectual.

II

Sin perjuicio de que hubiera sido deseable una mayor descripción de los tratamientos de datos personales en la MAIN, **esta Agencia valora muy positivamente tanto la inclusión del análisis del impacto en la protección de datos personales como la citada disposición adicional**, respecto de la cual se realizan las siguientes observaciones:

a) Existe una reiteración respecto al ejercicio de los derechos de los afectados en el párrafo segundo del apartado 1 y en el párrafo 10 del apartado 2, sin que sea posible establecer límites a dichos derechos en virtud de una norma reglamentaria.

b) La finalidad del tratamiento incluye no solo la inscripción sino también la anotación de los correspondientes derechos.

c) En relación con el principio de minimización de datos, el artículo 12 del proyecto no incluye entre los datos de las solicitudes el correspondiente al número de teléfono. Además, al no ser un dato necesario al existir otros datos de contacto, su aportación debería tener carácter voluntario.

d) Los datos personales son facilitados por los propios afectados o por sus representantes, por lo que deberá darse cumplimiento al deber de información en los términos previstos en el artículo 13 del RGPD.

e) En cuanto a la conservación de los datos personales, debe tenerse en cuenta no solo la necesidad de su conservación derivada de su función como registro público y como consecuencia de la aplicación de la normativa de propiedad intelectual, incluido el pase al dominio público por extinción de los derechos o la obligación de conservación de los ejemplares prevista en el artículo 27.4 del proyecto, sino también por la aplicación de la normativa sobre Patrimonio Histórico Español y la normativa archivística pública.

f) En cuanto a la comunicación de los datos personales, debe partirse de que se trata de un registro público, regulándose la publicidad registral en el Capítulo VI del proyecto.

En consecuencia, se proponen las siguientes modificaciones en el texto de la disposición adicional única:

Disposición adicional única. Protección de datos de carácter personal.

1. Los tratamientos de datos personales regulados en el presente real decreto se llevarán a cabo conforme a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Los derechos de acceso, rectificación y supresión se ejercitarán conforme a la normativa referida en el párrafo anterior. ~~sin perjuicio de las especificidades que se recojan, en su caso, en los apartados siguientes.~~

2. El tratamiento de los datos personales relativos a las solicitudes dirigidas al Registro de la Propiedad Intelectual, ~~a las que se refieren los artículos 12 y 13,~~ tendrá por finalidad la inscripción o **anotación** de los derechos relativos a las obras, actuaciones o producciones protegidas por el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, ~~de acuerdo con lo previsto en el artículo 18 y siguientes.~~

Responsable y Base jurídica del tratamiento: Son responsables del tratamiento: el centro directivo competente en materia de propiedad intelectual del Ministerio de Cultura y Deporte y las Comunidades Autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla competentes en la materia, al objeto de poder desarrollar sus funciones.

La base jurídica del tratamiento es el artículo 6.1 e) del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016.

Minimización de datos: los datos recogidos se limitarán al nombre, apellidos, NIF/NIE/Nº de documento que acredite la identidad si se trata de personas extranjeras, nacionalidad, domicilio, correo electrónico y, **en el caso de que voluntariamente se facilite, el** teléfono del titular o titulares de los derechos de propiedad intelectual que se pretendan inscribir, así como la identificación del medio electrónico, o en su defecto, lugar físico en que desea que se practique la notificación.

Fuentes y exactitud de los datos: Los datos personales serán recabados de las solicitudes formuladas ante el Registro de la Propiedad Intelectual.

Transparencia: En virtud de la referida procedencia de los datos obtenidos, **deberá darse cumplimiento del deber de información previa a los afectados conforme a lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016.**

Conservación y seguridad de los datos: En virtud de la finalidad del tratamiento, la conservación de los datos será indefinida, aun cuando se cancele el asiento registral, **en los términos previstos en el texto**

refundido de la Ley de Propiedad Intelectual y en la Ley de Patrimonio Histórico Español.

El responsable del tratamiento garantizará la aplicación de las medidas de seguridad correspondientes en cumplimiento del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad y la Orden CUD/1313/2019, de 27 de diciembre, por la que se aprueba la Política de Seguridad de la Información en el ámbito de la administración electrónica del Ministerio de Cultura y Deporte.

~~*El ejercicio de derechos para las personas físicas sujetas a la normativa de protección de datos se garantizará conforme a la normativa general de protección de datos.*~~

La publicidad del registro se llevará a cabo en los términos previstos en la normativa sobre propiedad intelectual. Fuera de dichos supuestos, estos datos sólo serán comunicados a otras Administraciones Públicas y a la Administración de Justicia en el ejercicio de sus competencias, cuando sea necesario para la tramitación y resolución de sus procedimientos, y se limitarán a la gestión de las inscripciones de derechos de propiedad intelectual en el Registro de la Propiedad Intelectual.